VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

La protesta territorial en Córdoba entre el auge y la crisis neoliberal.

Medina, Leticia y Franco, María José.

Cita:

Medina, Leticia y Franco, María José (2011). *La protesta territorial en Córdoba entre el auge y la crisis neoliberal. VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-093/63

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/ePyY/bhp

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

Instituto de Investigación Gino Germani
VI Jornada de Jóvenes Investigadores.
10, 11 y 12 de noviembre de 2011
María José Franco
CIFFyH, UNC
Mariajosefranco2010@gmail.com
Leticia Medina
CIFFyH, UNC
letmedina@hotmail.com
Eje Problemático 3: Protesta y conflicto social. Practicas de organización y procesos de transformación.

"La protesta territorial en Córdoba entre el auge y la crisis neoliberal (1989-2003)"[1]

Desde disciplinas como la ciencia política y la sociología se han elaborado explicaciones sobre las transformaciones producidas durante la década de los '90, recuperando la dimensión política del barrio y las modalidades de organización y acción de una pluralidad de actores colectivos emergentes. La noción de "territorialización" se desarrolló así como esfuerzo por nombrar diversas cuestiones: los cambios a nivel del Estado –particularmente en las políticas sociales estatales de orden nacional que desde mediados de la década asumieron una lógica descentralizada, focalizada y comunitarizada (Danani, 2008; Merklen, 2005; Grassi, 2003) – y, en el contexto barrial, para referir a las nuevas socialidades que se construirían ya no en torno al trabajo sino a la comunidad, al territorio de pertenencia (Svampa, 2005; Merklen, 2005).

Los últimos años del siglo XX en Córdoba son el escenario de emergencia de una multiplicidad de actores que protestan y demandan teniendo como importante soporte a los *territorios*: "vecinos", "pobres", "villeros", "desocupados", organizaciones comunitarias y barriales adquieren una nueva significación como protagonistas de la protesta social. El reconocimiento de la trayectoria de estos colectivos, las principales fuentes de las que se nutrieron y los modos en que fueron constituyéndose como actores de peso en el espacio local -en la protesta pero también en la negociación y la articulación con el Estado- ofrece pistas para la comprensión de estos procesos.

[1] Algunos desarrollos de esta ponencia forman parte de un capítulo de un libro aún no publicado.

Este trabajo propone indagar las transformaciones y modalidades que asume la acción colectiva de protesta con anclaje territorial en Córdoba, en su compleja relación con los cambios operados en el Estado, particularmente aquellos producidos en las políticas sociales durante el período bajo estudio. Partimos de la hipótesis de que la protesta territorial-barrial en el período registra variaciones en cuanto a los modos de significar e inscribir demandas en el espacio público, desplazándose centralmente desde el hábitat al trabajo y a la implementación de políticas asistenciales. Sin embargo, sostenemos, estos corrimientos refieren no sólo a un cambio en la demanda de actores particulares, sino también a la emergencia de nuevos actores en el escenario político y al debilitamiento de otros, proceso que guarda relación, entre otros factores, con las transformaciones operadas en el Estado y en las políticas públicas. Como proponemos en el próximo apartado, atender a estas transformaciones implica no sólo enfocar los cambios en los aparatos institucionales sino también a la dimensión político-cultural de este proceso.

Desde un abordaje cualitativo, analizaremos esta dinámica a partir de tres casos de organizaciones cordobesas que fueron protagonistas en el escenario de la protesta y que, entendemos, ofrecen claves para comprender algunos de los rasgos que asumió la acción colectiva a lo largo del período [2]: la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales, la agrupación Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie[3].

Con el objetivo de formular algunas primeras lecturas que permitan avanzar en la construcción de un relato histórico sobre la acción colectiva con anclaje territorial en Córdoba, se analizan los casos alrededor de tres aspectos: el proceso organizativo, la conflictividad política y la articulación con el Estado[4]. Asimismo, retomamos en este relato algunos antecedentes generales, para analizar los tres períodos marcados por los sucesivos gobiernos provinciales, resaltando en cada uno de ellos la presencia de estas organizaciones.

Acerca de la acción colectiva, la protesta y el Estado.

Recuperando aportes de distintas corrientes sociológicas que abordan la cuestión de la movilización social, proponemos comprender a las *acciones colectivas* como acciones de cualquier tipo que requieren de la participación cooperativa de al menos dos individuos en su

---

[2] En función de la información provista por la base de datos de acción colectiva de protesta elaborada por el equipo de investigación del que formamos parte, coordinado por la Dra. Mónica Gordillo, CIFFYH, UNC.

[3] En el caso del Movimiento Barrios de Pie, incluimos en el análisis la trayectoria de la organización Córdoba desde Abajo, en tanto fue la primera organización territorial de este período impulsada por la Corriente Nacional Patria Libre, partido al que estuvo vinculado Barrios de Pie.

[4] En adelante, los relatos de referentes de organizaciones que se citen incluirán nombres de fantasía con objeto de preservar la identidad de los entrevistados.

realización (Schuster; 2005) y que suponen adscripciones identitarias, más o menos precarias e inestables. Señala Melucci (1994) que es posible reconocer en su desarrollo la construcción de lazos de "solidaridad" así como también de "conflictos" o - en algunos casos- consensos en torno a determinados recursos simbólicos o materiales.

Desde esta concepción, estos actores no están preconstituidos – sus prácticas no son a priori transgresoras o reproductoras - sino que se constituyen en la lucha por la hegemonía, entendiendo por ella un conjunto de operaciones simbólicas que al tiempo que conforman – interpelando- a los sujetos, reordenan el campo de percepción de los mismos acerca de su participación en el juego de la vida social y otorgan sentido a sus experiencias. Ello no significa adherir a concepciones estructuralistas radicales, sino reconocer el peso de los mandatos hegemónicos en la constitución de la subjetividad sin desconocer, por otra parte, la dimensión autoconstituyente de los sujetos y la precariedad e inestabilidad de las eventuales adscripciones identitarias (Grüner, 1998).

Si por política entendemos la disputa por configurar los límites que estructuran la vida social, "proceso de delimitación en que los hombres, regulando sus divisiones, se constituyen como sujetos" (Lechner, 1981b), este enfoque presupone una relación de mutua implicación lógica entre procesos políticos y culturales. Así, las operaciones culturales implicadas en la lucha hegemónica son en sí mismas políticas, en tanto se trata de la lucha por definir los términos de esa «unidad subyacente» a la fragmentación de las prácticas culturales. (Grüner, 1990: s/d).

En el marco de esta perspectiva inscribimos el concepto de *acción colectiva de protesta (ACP)*, como "(…) acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientada al sostenimiento de una demanda (en general con referencia directa o indirecta al Estado). En este sentido, cabe remarcar que la noción se limita a partir de su carácter contencioso e intencional, por un lado, y de su visibilidad pública, por el otro" (Schuster; 2005: 56)[5]. La demanda puede dirigirse al Estado o a todo el sistema político, así como a otros actores de poder: empresas, medios de comunicación, entre otros.

Por un lado, entonces, el *conflicto* se presenta como dimensión constitutiva de la acción contenciosa: la ACP implica e instituye un escenario de conflicto, atravesado por ciertas reglas de juego pero que no determinan los cursos de acción. (Nardacchione, 2005). Por otro lado, el escenario de conflicto instituye el antagonismo, que no supone sólo una cierta

[5] Este planteo tiene una serie de consecuencias metodológicas. Supone pensar como unidad de protesta a la acción, privilegiando el carácter activo de un sujeto que define y lleva a cabo cursos de acción. La unidad espacio-temporal del sujeto de acción es a la vez la unidad de la acción de protesta. Considerar como unidad de protesta sólo al resultado, en tanto evento - una marcha, un corte de calle y una asamblea, entre otras – implicaría un modo de reificación de la acción, negando así su naturaleza subjetiva. Por lo contrario, desde esta perspectiva, las diferentes acciones son tomadas como un encadenamiento de eventos producidos por un sistema de acciones unificadas en la continuidad de decisiones de un mismo actor.

predisposición a la acción sino, en el plano de lo simbólico, la producción de un *trazado* que orienta la constitución de los sujetos en disputa. El antagonismo como tensión que otorga lugares y nombres a los actores del conflicto permite el despliegue de una "ilusión identitaria" que sustenta la cohesión interna de los protagonistas de la protesta. El antagonismo, en este marco, es una operación de sentido que ordena el campo de lucha y somete a otras contradicciones a la polarización así planteada.

Sin embargo, el conflicto político no se reduce a aquella polaridad simple entre dos términos antagónicos e irreductibles, sino que supone la apelación a un *otro*, que garantiza lo común entre las partes: "El antagonismo debe traducirse en un sentido público que pueda generalizar una prédica dentro de un campo hegemónico de disputa discursiva" (Nardacchione, 2005: 93). Con "sentido público" refiere este autor a la apertura pública-comunicativa de una determinada cuestión, a la pretensión de generalización de una argumentación que permita juzgar de otra forma una determinada situación conflictiva. En este trabajo proponemos concebir a lo público como arena de disputa política por la construcción de los modos hegemónicos de representación de la sociedad, por la constitución de los sujetos sociales y las formas en que estos se tornan visibles. Implica atender a los modos en que la sociedad se autorrepresenta -es decir, a cómo la vida social, sus asuntos comunes y su expectativa de futuro aparecen visiblemente presentados para la propia comunidad-; a los procesos de hegemonización en los que se juega la creatividad de lo social y en los que se constituyen los sujetos de la política (Caletti, 2006).

Desde este lugar, entonces, las transformaciones que se producen en las acciones colectivas de protesta territoriales/barriales, están vinculadas también a los particulares modos en que -en determinadas condiciones socio históricas, producto de específicas relaciones de fuerza y de los rasgos que asumen lo político y la cultura como producto de dichas disputas- estos actores son interpelados con unas determinadas posiciones y papeles en el espacio público.[6] Por otro lado, estos sujetos colectivos recrean su propia identidad poniendo en juego elementos disponibles que remiten a largos procesos histórico-sociales. De aquí la importancia de atender a otras temporalidades, que permiten reconocer fracturas sociales, desafiliaciones y nuevas formas de "reafiliación".

En sintonía con el planteo de Merklen (2005), entendemos que un enfoque que pretenda establecer relaciones lineales entre los supuestos derechos vulnerados y la protesta como su

---

6 Con Hall (2003) entendemos por interpelación, las propuestas de identificación y de construcción de subjetividades más o menos contingentes producidas desde discursos específicos que condicionan pero no son necesariamente determinantes de las identidades de los sujetos.

respuesta reactiva, impediría reconocer la politicidad "positiva" de la movilización popular. Una politicidad que, ante la pérdida del trabajo como fuente de ingreso y de integración social se construye centralmente, por un lado, en torno a relaciones y socialidades territoriales, y por otro, alrededor de una relación con el Estado que incluye la protesta así como diferentes modos de negociación orientados a la supervivencia y/o a la garantía de derechos básicos.

En este sentido se vuelve necesario analizar esos procesos en relación con las transformaciones operadas en el Estado y, particularmente, con las políticas sociales descentralizadas, territorializadas y focalizadas en innumerables grupos definidos como vulnerables. Unas políticas sociales que, en sentido amplio, constituyen uno de los núcleos de los procesos de *reproducción de las sociedades capitalistas* en tanto contribuyen a la construcción de "un orden social como totalidad" (Lechner: 1981a). De este modo, las políticas sociales configuran un orden político que marca ciertas condiciones de lucha social –los actores, las demandas, los espacios y los tiempos legítimos de disputa - y de intervención y capacidad de imposición de las políticas del Estado (Grassi, 2003).

Esta breve puntualización teórica permite orientar la mirada hacia las particulares formas que asume la acción colectiva con anclaje territorial –de las organizaciones de desocupados y de otros colectivos organizados en torno al barrio-, como ámbito de sociabilidad política y como espacio de disputa por los modos de significarse a sí mismos como sujetos y a la sociedad en su conjunto. Nos abocaremos a ello en los apartados que siguen.

1989-1995: conformación de organizaciones y construcción de fuerzas.

Las llamadas "leyes de impunidad", el asalto al cuartel de la Tablada, los alzamientos *carapintada* y la crisis hiperinflacionaria que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín son algunos hitos que, a nivel nacional, marcaron el declive de las expectativas sociales creadas en torno al imaginario democrático y sus instituciones, y dieron sustento a la salida neoliberal impulsada durante el menemismo. Este será también el contexto de crisis de los partidos políticos tradicionales y de consolidación de colectivos que organizaron sus acciones en torno a lo *social,* y que venían gestándose desde comienzos de la democracia, en muchos casos con antecedentes en los períodos de movilización previos.

Frente a la crisis hiperinflacionaria desatada en la Argentina en 1989, el gobierno provincial conducido por el radical Eduardo Angeloz[7] convocó a una Mesa de Emergencia Social en el marco de la cual se dispusieron acciones de contención para los sectores más castigados. En

[7] Angeloz había sido electo como gobernador en 1983, y fue reelecto en dos períodos posteriores, hasta 1995.

esa experiencia de articulación con el Estado participaron cuatro ONGs que trabajaban en las comunidades periféricas de Córdoba y que a través de ese espacio canalizaron junto a las organizaciones de base la ayuda social del Estado a los habitantes de barrios y villas.

Esta articulación fue un antecedente de la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, una experiencia de planificación y ejecución de políticas sociales desarrollada en Córdoba entre 1992 y 1998. La Mesa de Concertación fue resultado de un encuentro entre cuatro redes de organizaciones barriales y las ONGs con las que éstas se vinculaban[8], acompañado desde las esferas del Estado por funcionarios que intuyeron las potencialidades de este espacio. Estas redes habían nacido a mediados de los años '80 como fruto del trabajo de promoción social desarrollado por estas organizaciones técnicas, y articulaban a una importante cantidad de agrupaciones y poblaciones de las villas y barrios periféricos de Córdoba alrededor de la problemática de la vivienda, el acceso a la tierra y a los servicios públicos.

A mediados de 1992, el taller "Para superar el aislamiento" culminó con la constitución del Plenario de Organizaciones de Base, que poco después se denominó Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS). La Mesa se integró en ese mismo momento con el Plenario (luego UOBDS), las cuatro organizaciones técnicas de apoyo, el gobierno provincial -representado por el ministro de Desarrollo Social - y el gobierno municipal.

Durante el período de auge de la Mesa de Concertación, desde su creación hasta la caída del gobernador Angeloz a mediados de 1995, la Unión de Organizaciones de Base se consolidó como una de las principales estructuras movilizadoras desde el espacio barrial. Como analiza Scribano (1998), la referencia a los barrios y villas remitía a la percepción de un espacio y una situación compartidos, y a la definición de los actores en tanto pertenecientes a un sector particular. Frente a otros tipos de representación sectorial o partidaria, las organizaciones de base se constituyeron como actores cuya identidad emergió y dialogó con las señas particulares de cada uno de los barrios y villas de Córdoba. Por otra parte, desde los comienzos de esta experiencia los propios dirigentes de la Unión se nombraron a sí mismos como "villeros" o eventualmente "pobres", resaltando a la vez la condición social que se atravesaba y la necesidad de recibir atención del Estado.

Desde la propia constitución de la Unión se destacaron además otras dos cuestiones: su definición acerca de la conquista de los derechos sociales como horizonte que ordenaba las acciones *con* y *frente* al Estado, y su carácter de espacio de articulación para una diversidad

---

[8] La Coordinadora de Villas y Barrios Carenciados, asesorada por Mujica; la Coordinadora de Loteos Indexados, por CECOPAL; la Comisión de Hábitat Popular, con SERVIPROH, y el Encuentro de Comunidades Populares en Marcha, apoyado por el SEHAS.

de experiencias de organización territoriales y de base. En los primeros años, concentrados en la gestión de proyectos de habitat para las más de 100 organizaciones de base que la integraban, la Unión no protagonizó acciones de protesta significativas. Un estilo de conducción y un modelo de administración de corte neocorporativista que incluyó instancias para la concertación de actores en diversos ámbitos (Carrizo, 1997; Gordillo, 2002), constituyó el escenario para la consolidación de la Mesa como espacio legítimo para la canalización de las demandas.

En esa primera etapa, entonces, si bien se realizan movilizaciones y concentraciones masivas, no tuvieron el carácter de acciones de protesta sino que se inscribieron en el proceso de construcción y consolidación de la organización y de su identidad villera/barrial. El 15 de diciembre de 1992 se entregaron los primeros recursos a las organizaciones de la UOBDS y se firmó un acta compromiso entre los integrantes de la Mesa de Concertación; como cierre, se realizó un festejo que recibió financiamiento del propio Ministerio de Desarrollo Social: "la fiesta reúne por primera vez después de más de una década a numerosos grupos que pueden dimensionarse como fuerza y conjunto social" (SEHAS, 1994: 7).

El 8 de julio de ese año, la UOBDS realizó una conferencia de prensa y un acto en el Comedor Universitario, precedido de una marcha "como expresión de libertad" (SEHAS, 1994: 8) en la que participaron más de cuatro mil personas. En estas actividades comenzó a delinearse una agenda local de reivindicaciones del movimiento que organizaría sus prácticas por esos años: la institucionalización del espacio de concertación con el Estado de modo de asegurar su permanencia más allá de los recambios en el gobierno, la reglamentación de la Ley de Villas N° 5288 sancionada en 1971 y nunca reglamentada, y la firma del Plan "Arraigo" con el gobierno nacional -un programa que disponía la transferencia a las provincias de terrenos fiscales nacionales ocupados con asentamientos irregulares-[9]. Poco después, el 22 de septiembre, nuevamente se organizó una concentración, marcha y acto en la plaza de la Intendencia, para festejar el primer año de la Unión.

En relación con el problema del acceso a la tierra, el 29 de octubre de 1994 una de las cooperativas integrantes de la UOBDS movilizó a los vecinos exigiendo ser incorporada al programa Arraigo. Se calculaba que 33 villas de Córdoba estaban asentadas sobre terrenos fiscales de la Nación y podrían beneficiarse con el plan[10]. Dos meses más tarde, se formalizó en la Legislatura la firma del convenio entre la Nación y la provincia de Córdoba para la implementación del Programa (ley N° 8468).

---

[9] La Voz del Interior, Córdoba, 9/7/1993, 10A.

[10] La Voz del Interior, Córdoba, 24/10/1994, 9C

Sin embargo, en paralelo a estos decisivos avances en las negociaciones con el Estado, la Unión debió enfrentar algunos conflictos. Uno de ellos fue la resistencia de los vecinos de los barrios de clase media que "recibían" a las comunidades villeras, trasladadas desde sus asentamientos irregulares hacia los distintos barrios de la ciudad en los que habían adquirido tierras en el marco de los proyectos de la Mesa de Concertación. En octubre de 1994, La Voz del Interior publicó una solicitada firmada por la UOBDS y las 4 ONGs, y con la adhesión de diversos referentes sociales y políticos, en la que se advertía sobre "actitudes de discriminación y rechazo desde algunos sectores de los barrios de la ciudad de Córdoba por la ejecución de nuevos proyectos habitacionales destinados a estos sectores, basados en aspectos de seguridad"[11]. A mediados del año 1994, vecinos de Inaudi habían realizado concentraciones y una juntada de 600 firmas para impedir la relocalización de los habitantes de la Villa Angelelli, organizados en la Cooperativa 2 de abril (Desafíos Urbanos nº 7, 1995). De esta manera, la conquista de la tierra como demanda de estos pobladores al Estado abrió una nueva etapa del conflicto, signado por la distancia simbólica y material que separaba a los "villeros" de los "vecinos". La tierra, inscripta en un barrio, seguía siendo objeto de disputa pero ahora con nuevos contendientes. Por otra parte, la Unión debió enfrentarse a la movilización de organizaciones barriales no integradas a su estructura, que reclamaban ser incorporadas a la negociación con el Estado y denunciaban tanto al gobierno como a la propia Unión por su exclusión de la Mesa [12].

En junio de 1995, Angeloz enfrentaba una crisis económica, política y social que incluyó un sostenido clima de protesta y violencia en las calles[13]. En ese contexto, el gobierno provincial decidió movilizar a las fuerzas policiales para que mantuvieran el control de las villas, visibilizando para las organizaciones sociales el "otro rostro" del Estado, es decir, su capacidad para frenar el desarrollo de la protesta y marcar los límites de lo legítimamente reivindicable. Frente a esta medida, en una reunión reservada con el propio Angeloz, los dirigentes de la Unión exigieron el retiro de la presencia policial en las comunidades y el cumplimiento de los planes sociales pactados, bajo amenaza de plegarse a las acciones de protesta impulsadas por los gremios. Según los relatos, la UOBDS participó del paro y la movilización convocada por los gremios estatales de la provincia, pero con un plan de lucha

---

[11] La Voz del Interior, Córdoba, 12/10/1994, 6A

[12] Expresión de ello fueron algunas movilizaciones como la de la Villa "Los 40 Guasos" en mayo de 1994 que cortó la ruta 9 en demanda de viviendas y servicio de agua potable. La protesta fue encabezada por una organización cuyo nombre -"Cooperativas de villas de emergencia y barrios carenciados"- remitía tanto a la UOBDS como a las coordinadoras que la integraron, pero que luego no tuvieron continuidad como tal. El diario destacaba que estos vecinos "no integran la Mesa de ConcertaciónLa Voz del Interior, Córdoba, 24/5/1994, 11A.

[13] Cfr: (Arriaga, Franco, Medina, 2011).

propio frente a la falta de respuesta a sus demandas; la acción consistió en el corte simultáneo de nueve rutas de acceso a Córdoba (Desafíos Urbanos, 1995: 26). Es recién entonces, hacia el final del período de gobierno de Angeloz y en un contexto de crisis, que la Unión comienza a visibilizarse en el espacio público como un actor que confronta con el Estado en demanda por los derechos establecidos y los conquistados en instancias de articulación multiactoral.

Al mismo tiempo, estos son los años de gestación de otros agrupamientos vinculados con tradiciones y trayectorias políticas diversas, como Centros Vecinales Autoconvocados y el Movimiento Córdoba desde Abajo, antecedente de Barrios de Pie, que aportarán a la configuración de un nuevo escenario político. No obstante, sus demandas y acciones contenciosas se harán visibles en el espacio público en el período siguiente.

1995-1999: confrontaciones y rearticulaciones.

El 12 de julio de 1995, a poco tiempo de ocurrida la quema de la Casa Radical, se produjo la asunción anticipada del gobernador elector Ramón B. Mestre. Una de las dimensiones del ajuste impulsado por el nuevo gobierno provincial fue la reducción de la planta de personal del Estado y la reestructuración del organigrama ministerial. En ese proceso, el Ministerio de Desarrollo Social fue fusionado con otras áreas –entre ellas la de seguridad - y pasó a denominarse Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social. [14]

Una nueva modalidad de abordaje de la cuestión social se fue instalando desde la asunción de Mestre. La Mesa de Concertación fue suspendida -sin que se derogaran los instrumentos legislativos que la habían formalizado- y se registró un proceso de retracción y debilitamiento del espacio a través de tres mecanismos principales: la *desinstitucionalización* de la instancia de negociación (con la suspensión de las reuniones y del financiamiento de los proyectos); posteriormente, cuando se retomaron las reuniones, la *diversificación* de los actores participantes (con la convocatoria a otros actores cuya diversidad de intereses y perfiles tornó casi inviable la construcción de acuerdos: Cáritas, uniones empresarias, organizaciones de desocupados, otras organizaciones vecinales, etc.); y por último la *deslegitimación* de la instancia de concertación con la Unión a partir de la negociación con organizaciones por fuera de esa estructura. A estos mecanismos se agregó además un estilo de conducción confrontativo con quienes protagonizaron protestas contra las medidas de gobierno y una política de disciplinamiento hacia pobladores de barrios periféricos[15].

---

[14] Ramón Bautista Mestre, de la Unión Cívica Radical, había ganado la elección a gobernador el 14 de mayo de 1995 con el 47,2% de los votos.

[15] En noviembre de 1996, una serie de operativos policiales en quince barrios populares, al mando de la Dirección de

Frente a esta reestructuración de los actores, espacios y modos de negociación legítimos impulsada por el gobierno, la Unión desplegó una estrategia de confrontación y presión en las calles y en los espacios legislativos. El 8 de noviembre de 1995, las organizaciones nucleadas en la Unión encabezaron una marcha con cinco mil personas en reclamo de la reactivación de la Mesa de Concertación, y sostuvieron acciones de protesta callejera en los días subsiguientes. Al mismo tiempo, algunos dirigentes de la Unión habían comenzado a explorar vínculos y negociaciones con el gobierno nacional, obteniendo resultados satisfactorios a sus demandas[16]. Desde 1995, se lograron acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social para incluir a la Unión entre los ejecutores del Programa Materno Infantil (PROMIN) y del Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI). De este modo, la Unión empezaba a incorporar otros temas en su agenda: en el año 1996, inauguró 23 centros de cuidado infantil (CCI) para 2300 niños/as de entre 2 y 14 años, con financiamiento del Estado nacional.

Para entonces la UOBDS también reorientó su estrategia con acciones de presión hacia otros sectores políticos con participación legislativa. El 1° de mayo celebró el día del trabajador con una olla popular frente a la Legislatura cordobesa, y consiguió una presentación formal del bloque del FREPASO solicitando la reapertura de la Mesa. Esta es la primera protesta registrada en la que se alude directamente a la cuestión del trabajo; en posteriores ocasiones se reiterarán las demandas y propuestas vinculadas a la desocupación, ampliándose así el campo de sentidos construidos en torno a la identidad y las luchas de esta organización.

Este período será también escenario para la emergencia en el espacio público de los Vecinos Autoconvocados. Este colectivo, llamado inicialmente Centros Vecinales Autoconvocados, había surgido en 1994 con la confluencia de vecinos pertenecientes a diferentes barrios de la ciudad. Una de sus primeras acciones públicas fue la disputa por el reconocimiento de los centros vecinales en la Carta Orgánica Municipal de Córdoba, sancionada el 6 de noviembre de 1995 por la Convención Municipal Constituyente durante la gestión del radical Rubén Martí. En este proceso y a medida que se fueron incorporando a la agrupación vecinos no organizados en centros vecinales, se fue conformando la organización Vecinos Autoconvocados. La condición de "vecinos" se construyó además en el modo en que sus integrantes se relacionaron y refirieron a sí mismos dentro y fuera del colectivo.

Operaciones y con participación de las divisiones Disproper, Canes, Caballería, Guardia de Infantería e Investigaciones, resultó en la detención de 170 personas. En varios de esos barrios existían organizaciones pertenecientes a la UOBDS. La Voz del Interior, Córdoba, 8/11/1996. Disponible en http://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/96/11/08/index_05.htm

16 Una funcionaria del gobierno radical interpreta este movimiento: "la Nación apoyaba el trabajo en vivienda porque tenía intereses políticos en la Mesa de concertación, porque tenía afinidad política con gente de las organizaciones de base. [La dirigente de la UOBDS] Graciela Palomeque iba a Buenos Aires y conseguía más cosas que nosotros" (entrevista a Ana Dressino, secretaria de Promoción Humana, Córdoba, 31/08/2010).

Por otra parte, si bien entre los integrantes de Vecinos Autoconvocados existían distintas perspectivas políticas, otra particularidad es el perfil ideológico que asumió como colectivo, que también tuvo su expresión en el modo de vinculación con el Estado. En este sentido, el término "autoconvocados" aludió a su constitución como organización independiente de los partidos políticos y que ofrecía a los vecinos un espacio al que recurrir y en el que conseguir asesoramiento y capacitación sobre sus derechos.

"Vecinos" y "autoconvocados" se conjugaron, así, como referencias desde las cuales la agrupación dotó de un sentido particular a sus acciones de protesta y a su relación con el Estado, al que responsabilizó por la vulneración de derechos y al que le demandó, primero a través de acciones administrativas–judiciales y luego con marchas, concentraciones y ocupaciones para peticionar. La ocupación de edificios públicos como estrategia de confrontación, como modo de presión al Estado y a los diferentes gobiernos fue uno de los formatos más utilizados por Autoconvocados. El modo en que esta acción es nombrada por distintos actores -como "toma" principalmente por la prensa, y como "petición" en el discurso de la organización- explicita también las disputas por los sentidos públicos construidos en torno a este formato y al propio actor, al tiempo que la preocupación de esta organización por encontrar modos de visibilizar y conseguir impacto mediático en torno a estas acciones.

La demanda principal de Autoconvocados estuvo vinculada a la defensa de la vivienda única como bien social, frente a los remates por deudas impositivas, de obras públicas y/o servicios que los vecinos no sólo no podían pagar sino que consideraban "ilegales" e "inconstitucionales". Estas demandas se plantearon generalmente en términos de exigencia al gobierno y al Estado por la garantía de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. De esta manera, es posible reconocer entre los sentidos que articulan las demandas y acciones de esta organización la apelación a una perspectiva "ciudadana" o -en palabras de Garretón (2002)- de "democratización social"[17]. Asimismo, la problemática de los derechos atravesó la historia y las prácticas de este colectivo. Autoconvocados participó desde fines de los '90 en el espacio multiactoral de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos; desarrolló la Escuela Comunitaria de Oficios "Hugo Núñez" -en la que, desde 1992, enseñó oficios a los jóvenes y aportó a la promoción de derechos civiles y políticos[18]-, y participó en

[17] Garretón da cuenta de algunos procesos alrededor de los cuales se habría organizado la acción colectiva hacia fin de siglo en América Latina. En particular, la "democratización social" alude por un lado a la redefinición y ampliación del concepto de ciudadanía en las luchas sociales -muchas de las cuales se orientan a exigir una mayor calidad de los servicios, o a instaurar nuevos derechos allí donde no existen aun instituciones para garantizarlos-. Por otro lado, refiere las acciones colectivas dirigidas a superar las nuevas y crecientes formas de exclusión propias del modelo neoliberal.

[18] Según se consigna en el "Proyecto de Prevención socio-comunitario: curso de capacitación laboral en carpintería de madera", elaborado por la organización Vecinos Autoconvocados en 2001. Cfr. Ciuffolini (2007).

la ejecución de programas sociales de capacitación laboral para jóvenes.

También a mediados de la década, emergerá el que sería uno de los principales antecedentes locales de la agrupación nacional Barrios de Pie, el colectivo Córdoba desde Abajo. Esta organización territorial vinculada a la Corriente Nacional Patria Libre, desarrolló su trabajo principalmente en la ciudad de Córdoba, pero también logró instalarse en algunas localidades del interior, como Alta Gracia y Cruz del Eje. En el marco de la crisis de "representatividad" (Rinesi y Vommaro, 2007) y del creciente desarrollo de experiencias de trabajo territorial no partidario, algunos partidos también impulsaron espacios de construcción política desde los barrios y villas. En este marco Patria Libre desarrolló dos estrategias principales: en torno a la "juventud" -con fuerte presencia en la universidad- y a su trabajo en comunidades y barrios.[19] Desde sus primeras acciones en el espacio público, el perfil de Córdoba desde Abajo se configuró alrededor de una permanente interpelación al gobierno y a la sociedad en general orientada a evidenciar las desigualdades generadas por el modelo político y económico vigente. Desde esta perspectiva puede comprenderse una modalidad de protesta centrada en el reclamo de recursos para la subsistencia, que tuvo como apuesta su visibilización pública en la disputa de sentidos con el "consenso neoliberal". En julio y diciembre de 1996 Córdoba desde Abajo participó en una serie de protestas -concentraciones y ollas populares- frente a supermercados en demanda de alimentos. Como señala uno de sus referentes, por estos años *"el hambre era el eje principal de trabajo en los territorios, y se iba a los supermercados"* (entrevista a Enrique, 1 de julio de 2011). El 19 de julio se realizó además una movilización hasta la Legislatura, en donde se expresó el repudio a las políticas de ajuste del gobierno provincial. En algunas de estas acciones la prensa identificó a "villeros"; en otras ocasiones, el diario nombró a los participantes como "desocupados". Lo cierto es que estas acciones se produjeron en un contexto nacional en el que emergían decisivamente en la escena pública las organizaciones de desocupados con esta modalidad de protesta: en el mismo mes de julio de 1996, distintas organizaciones de desocupados y el Movimiento de Jubilados amenazaron en Buenos Aires con saqueos a supermercados[20]. En diciembre de ese año, nuevamente las cadenas de hipermercados recibieron la demanda de Córdoba desde Abajo, que se movilizó tras la consigna "una navidad para los pobres"[21] desplegando una acción coordinada con

---

[19] Al mismo tiempo se desarrolló una estrategia con los trabajadores que se plasmó en la creación de la Corriente Sindical 1° de Mayo que, junto a otras corrientes y sindicatos, impulsó diversas acciones de protesta: la marcha blanca hospitalaria en junio de 1995, la marcha de conmemoración del Cordobazo en mayo de 1996, protestas contra la división de EPEC en diciembre 1996, entre otras.

[20] Clarín, Buenos Aires, 25/7/1996. Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/96/07/25/coto.htm

[21] Clarín, Buenos Aires, 24/12/1996. Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/96/12/24/e-04102d.htm

habitantes de barrios colindantes a un nuevo hipermercado inaugurado poco antes.

A comienzos del año 1997, la emergencia provincial dictada en junio de 1995 se había extendido ya en dos ocasiones (ley N° 8482 de julio de 1995 y ley modificatoria N° 8504 en octubre del mismo año). En abril, la UOBDS emitió un comunicado rechazando los desalojos en distintos barrios de la ciudad y alertando sobre la "alteración de la paz social"[22]. Un emprendimiento empresario en terrenos fiscales nacionales había requerido la erradicación de asentamientos irregulares de larga data, intimando a una población que, por su parte, tramitaba la posesión de las tierras en el marco del Programa Arraigo.[23]

La advertencia tardaría pocos meses en convertirse en una realidad candente para el gobernador. El 7 de agosto de 1997, una multitudinaria movilización desde los barrios y villas con cortes de ruta en los principales accesos a la ciudad –y represión policial de por medio-, culminó con la toma de la Catedral en pleno centro de la ciudad por parte de los manifestantes. La UOBDS reclamaba la reapertura de cuarenta comedores, la entrega de lotes para viviendas y tres mil planes Trabajar[24], incorporando en la agenda de demandas los nuevos planes de empleo lanzados por el gobierno nacional y alrededor de los cuales comenzaba a organizarse el movimiento piquetero.

La movilización desde los barrios con cortes de rutas protagonizada por la Unión se inscribía así en un escenario de protesta que mostraba algunas novedades: la emergencia del corte de ruta como formato de protesta y la constitución de colectivos amplios con referencia nacional alrededor de la identidad piquetera y/o de trabajadores desocupados. En mayo de ese año, en el marco de una masiva protesta a nivel nacional de las organizaciones de desocupados, en Córdoba se habían registrado los primeros cortes en las rutas de acceso a la ciudad. El diario identificó en los distintos cortes a la Coordinadora de Desocupados, al Movimiento de Trabajadores por la Resistencia y a "desocupados e indigentes villeros"[25] de zonas periféricas de la ciudad. Las acciones se produjeron en la ruta nacional 9, en el Camino a 60 cuadras y en la ruta provincial 5 [26].

De esta manera, en Córdoba se inauguraba el corte de ruta como formato de protesta que reunía a diferentes actores e identidades y organizaba la demanda alrededor de la asistencia estatal en la forma de alimentos, planes de empleo y otras políticas sociales. El corte de calles

---

22 La Voz del Interior, Córdoba, 22/4/1997.Disponible en: http://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/97/04/22/tt_idx.htm

23 Idem. Este programa venía siendo implementado por la provincia desde 1994.

24 La Voz del Interior, Córdoba, 8/8/1997, 1A y 8A

25 La Voz del Interior, Córdoba, 28/5/1997. Disponible en: http://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/97/05/28/index_01.htm

26 Esta última protesta había sido impulsada por el MTR –agrupación de Alta Gracia que se disolvería poco después- y una organización vecinal de esa misma localidad que en 1996 se había integrado al movimiento Córdoba desde Abajo (Antonello, 2004).

y de rutas, quizá del mismo modo que la toma de edificios públicos, exponía en sus formas y en las demandas que inscribía no sólo la profundidad de la crisis económica y social sino, también, el agotamiento de los canales institucionales para el procesamiento y resolución de los conflictos. Aparecía, en este sentido, como "último recurso" frente a la presencia de un Estado que había cerrado todas las vías de comunicación y que comenzaba a reconocerse como un agente vulnerador de los derechos.

Por otra parte, se evidenciaba un proceso de constitución de colectivos que, incorporando algunas experiencias anteriores de trabajo territorial, reorganizaron la acción local en torno a la identidad piquetera y a la movilización nacional. Fundamentalmente luego de las puebladas de Cutral Co y Tartagal, la Federación de Tierra y Vivienda, los "MTD" (Movimiento de Trabajadores Desocupados), y otros espacios reestructuran la organización en los territorios. Para ese entonces Córdoba desde Abajo se encontraba también en un proceso de disolución, para confluir en otros espacios de articulación con perspectiva nacional.

Este proceso tiene en las organizaciones distintas implicancias. En el caso de Córdoba desde Abajo, se incorpora en 1999 a la Federación de Tierra y Vivienda, un espacio convocado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para nuclear y reorganizar el trabajo de algunas organizaciones territoriales. Patria Libre y Córdoba desde Abajo deciden asumir una nueva identidad para constituirse como frente barrial autónomo dentro de esta Central: la "CTA de los barrios". Mientras tanto, la Unión de Organizaciones de Base atravesaba debates similares, pero rechazaba la incorporación plena de la organización en las nuevas estructuras nacionales[27]. Veremos más adelante las derivaciones de cada uno de los caminos elegidos por estas dos organizaciones.

Por estos años comienzan a visibilizarse en la prensa local las acciones de protesta de los Vecinos Autoconvocados. En julio de 1998 se registra una concentración frente a la casa del presidente del Consejo Deliberante, en rechazo al aumento del 15% del boleto urbano de transporte[28]. Casi un año después, en mayo de 1999, se realizó una concentración frente al CPC de barrio Centro América con más de cien vecinos de la zona nordeste de la ciudad demandando lo que sería una de las principales luchas de Vecinos Autoconvocados: la defensa

---

[27] Revela un dirigente de la UOBDS: *"Nosotros en el '95, La Unión, (...) no me permitían que estuviera integrando al FTV porque decían que yo no podía estar acá y estar allá. Pero son dos cosas distintas, además que somos varios en el conducción. Si esto crece, como pinta para crecer, la FTV crecía con una organización nacional, con representación de casi todas las provincias, con comunidades aborígenes y todo. Y la Unión era una organización de capital porque tampoco se podía decir que era de provincia, era grande en capital, pero no a nivel provincial"* (entrevista a Mario, 2 de marzo de 2006).

[28] La Voz del Interior, Córdoba, 18/07/1998, 4A

de la vivienda única como bien social, frente a los remates por deudas[29] , vinculadas generalmente a impuestos municipales y al desarrollo de obras públicas.

A los pocos días tuvo lugar una acción que los Vecinos Autoconvocados recuerdan como un hito en la historia de la agrupación: la primera toma de la Catedral de la ciudad, medida que se repitió un mes más tarde, el 13 de junio de 1999[30]. En esta segunda oportunidad, entre veinte y cuarenta participantes de la organización permanecieron durante 45 días en la Catedral, en un salón contiguo al recinto principal y por momentos dentro de la misma iglesia. En estas protestas se solicitaba al poder Ejecutivo y al Legislativo la sanción de una "ley de emergencia social" que declarara, entre otros puntos, la vivienda única como inembargable e inejecutable y dispusiera un relevamiento socioeconómico en los barrios para determinar la capacidad contributiva de los vecinos. Asimismo, empieza a emerger una nueva problemática construida en torno a la desocupación; se solicita la creación de puestos de trabajo y la generación de empleo y seguro para desocupados.

Una nota especial merece la ocupación de la Catedral como formato disponible entre las distintas organizaciones territoriales que protestan en este período. Más allá de las diferencias entre los colectivos y las acciones que desarrollaron, la toma de la Catedral parece haber tenido para los actores el sentido de una ampliación del campo de los oponentes con la inclusión de la jerarquía eclesiástica, que mantenía fuertes y públicos lazos con el gobierno provincial. La ocupación de la Catedral, además de simbolizar el desamparo en el que se encontraban los sujetos y resguardar a los manifestantes frente a la eventual represión estatal, representaba una presión a la jerarquía de la Iglesia en reclamo de su rol como mediadora entre las organizaciones y el gobierno provincial. En estas ocupaciones se hacían visibles, además, las profundas fracturas sociales existentes, así como la histórica y creciente exclusión de quienes vivían en condiciones de pobreza:

"(...) los pobres nunca habían estado en la Catedral, entonces tomaban mate sentados en eso lugares tan tan lujosos, desplegaban la alfombra roja y se cagaban de risa los chicos, jugaban ahí arriba" (entrevista a Enrique, Córdoba, 1 de julio de 2011).

Simultáneamente, la Unión protagonizaba una de las últimas acciones masivas de protesta del período. En mayo de 1999, un corte de avenidas céntricas con quema de gomas y demanda por asistencia alimentaria y cumplimiento de los planes de vivienda reinstaló a este colectivo en un escenario dominado por las organizaciones piqueteras. En junio, la Unión realizó una toma del edificio Pizzurno, donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo

---

29 La Voz del Interior, Córdoba, 13/4/1999, 15A

30 La Voz del Interior, Córdoba, 2/5/1999, p. 21A y La Voz del Interior, Córdoba, 14/6/1999, 18A.

por la ejecución de planes para la compra de tierras, proyectos para la generación de empleo, créditos para vivienda, creación de centros de cuidado infantil y otras demandas. Los dirigentes anunciaron el desalojo del Pizzurno a partir de la promesa de una reunión con Ramón Mestre y José Manuel De la Sota, gobernador electo. La reunión se concretó el 8 de junio, pero las negociaciones se disolvieron en el marco del agotamiento del mandato de Mestre y de los quiebres que se venían produciendo en el seno de la propia Unión.

Se cierra de este modo un período en el que estas organizaciones territoriales despliegan su perfil confrontativo, amplían y/o redefinen sus demandas y sufren transformaciones en el marco de ciertos cambios en el escenario político. Un fuerte desequilibrio económico, la crisis política -expresada por ejemplo en el "voto bronca" en las diferentes instancias electorales del año 2001 (Gordillo, 2010)-, el crecimiento del movimiento piquetero, entre otros factores, atravesaron de distintos modos la dinámica de estas tres organizaciones.

1999-2003: rupturas, estallidos y nuevas búsquedas políticas.

La última etapa, correspondiente al ciclo de gobierno de la coalición integrada por el justicialismo y la UCD, fue un escenario complejo e inestable para el accionar de las organizaciones. En el primer mandato de José Manuel de la Sota, el Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social se convirtió en Ministerio de la Solidaridad, implementándose transformaciones institucionales asentadas en el ideario de las reformas *de segunda generación.*

La incorporación de dirigentes y técnicos como funcionarios de la gestión provincial y luego, con el triunfo de Kammerath, en la órbita municipal, fue una práctica recurrente y provocó hacia el interior de las organizaciones de base y las ONGs ciertos reacomodamientos y rupturas. Develar las razones e implicancias de estas decisiones requiere de una indagación que excede las posibilidades de este trabajo. De todos modos, la crisis de la Unión -que en 2002 dio origen a una nueva organización, el Movimiento de Organizaciones de Base (MOB)- no puede deducirse simplemente del proceso de incorporación de dirigentes a las filas del gobierno justicialista. Para analizar la continuidad de la experiencia de la Unión, es importante también atender al impacto de la crisis social y política de 2001 sobre los sujetos y los procesos organizativos de la época.

Cuando tuvieron lugar las jornadas de diciembre de 2001, la Unión estaba integrada por unas 28 organizaciones y la Mesa Directiva decidió no participar orgánicamente en ninguna actividad a la que fue convocada, dado que se veía el peligro de una especie de "golpe de

Estado"[31]. Pero al año siguiente, en agosto del 2002, la Unión realizó cortes de calle en una de las arterias principales del centro y a una cuadra de la casa de Gobierno, obturando el tránsito durante 26 horas. Al mediodía fueron desalojados por la Policía, que detuvo a 16 personas. Los manifestantes reclamaban alimentos y trabajo y una audiencia con el gobernador[32].

Unos días después, en el marco del cierre de la Marcha contra el Hambre organizada por la CTA, el MOB movilizó a cientos de personas por el centro de Córdoba para pedir ayuda alimentaria y planes de empleo. La marcha recorrió desde la intendencia hasta la sede de la casa de Gobierno, y se entregaron petitorios a las autoridades de ambos niveles.[33]

En lo que respecta a la organización Vecinos Autoconvocados, se trata de un período en el que se intensifican las protestas y se construyen nuevas demandas. El año 2001 fue uno de los más intensos, en el marco de movilizaciones masivas que se producían en todo el país en contra de las sucesivas medidas de ajuste. Una acción significativa por el despliegue del proceso organizativo previo y por los sentidos políticos que puso en juego fue el "Cabildo Abierto" realizado en la Plaza San Martín entre el 22 y el 25 mayo de 2001. La propuesta del *Cabildo* como "gobierno paralelo", retomaba de las asambleas populares el ideario de democracia directa para discutir problemáticas sociales. La experiencia culminó el 25 de mayo con una orden de desalojo que fue cumplida por la policía provincial.

En estos *cabildos* y en las protestas desarrolladas por estos años, la declaración de la emergencia económica y social continuó siendo la demanda que organizó un conjunto de reclamos impulsados desde la organización. A esto se sumó el rechazo a la privatización de los servicios de luz eléctrica que por entonces impulsaba el gobierno de De la Sota y, en el marco de la post crisis 2001, el repudio a las políticas de presión que recibía Argentina respecto de empresas extranjeras; además, diversos pedidos en relación a planes sociales y subsidios[34], principalmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJHD).[35]

Por otra parte, en este período la organización consiguió algunas respuestas a una de sus demandas principales. En junio de 2000, la ocupación del edificio del Consejo de Partidos Políticos por más de 150 vecinos solicitando el respeto de la ley de inembargabilidad de la

---

[31] Entrevista a Pablo, Córdoba, 29 de diciembre de 2003.

[32] La Voz del Interior, Córdoba, 7/8/2002, 4A.

[33] Pagina/12, 16-08-2002. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-8982-2002-08-16.html

[34] La Voz del Interior, Córdoba, 6/9/2000, 13A; 17/8/2001; 14/6/2000, 18A; 3/10/2001, 10A; 4/10/2001, 11A; 8/3/2001, 11A; 5/9/2001, 6A; 25/5/2002, 4A; 21/6/2002, 2A.

[35] El PJJHD - creado por decreto 165 el 22/2/2002 y luego modificado por decreto 565 del 3/4/2002- consistía en un subsidio "no remunerativo" de entre 150 y 200 pesos mensuales a cambio de contraprestaciones que debían realizar los "beneficiarios": jefes/as de hogar desocupados con hijos a cargo de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, o jefa de hogar en estado de gravidez. De los componentes que establecía el programa como posibilidad de contraprestación, el comunitario fue el más desarrollado (Franco, 2010).

vivienda única concluyó con la firma de un acta-acuerdo entre los vecinos y el nuevo gobierno para frenar el remate de viviendas. Al año siguiente, luego de reiteradas protestas y tras la toma de la Defensoría del Pueblo, los Vecinos Autoconvocados lograron llevar el conflicto de los remates de viviendas por deudas de obras públicas a la Legislatura provincial. El 20 de febrero de 2002, la Legislatura sancionó la Ley Nº 8998 (modificatoria de la ley 8067 de 1991) que suspendía por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas para familias pobres y desempleadas y autorizaba al Ejecutivo a prorrogar por tiempo indeterminado esa medida[36]. Por otra parte, el pedido de planes sociales y subsidios suponía la incorporación de una nueva demanda así como el fortalecimiento de distintos proyectos: taller de costura, copa de leche, panificadora, granja, herrería y carpintería. A partir de la incorporación de estos planes Vecinos Autoconvocados se integró al Consejo Consultivo Municipal, donde confluyó con otros actores como la UOBDS, el MOB y Barrios de Pie.[37]

Por su parte, las organizaciones de desocupados crecían tanto a nivel organizativo y de articulación como en su presencia pública en tanto sujetos de demanda frente al Estado. En ese contexto, Córdoba desde Abajo se había incorporado en 1999 a la CTA, en el marco de la cual se creó poco después el Movimiento Barrios de Pie, como estrategia de diferenciación de la Corriente Patria Libre respecto de la conducción de la CTA. Barrios de Pie avanzó en la construcción de una estructura que le permitió asumir la gestión de diversos espacios y políticas sociales, ordenando sus acciones alrededor de la demanda por trabajo, por la entrega de planes sociales y la adjudicación de recursos para el desarrollo de proyectos comunitarios.

La organización impulsó una diversidad de iniciativas comunitarias vinculadas a la actividad productiva, la educación, la salud, las problemáticas de género, entre otros, que se articulaban con las acciones de protesta en demanda por asistencia estatal. En cuanto a la perspectiva política de esta propuesta, Barrios de Pie apostaba a la construcción de "poder popular desde la experiencia cotidiana de los comedores, las huertas, la educación y comunicación popular, los microemprendimientos" (Klachko, 2009: 207); la vinculación orgánica entre Barrios de Pie y Patria Libre debía garantizar a su vez la "politización" de ese trabajo comunitario. En el año 2002, Barrios de Pie se integró al Bloque Piquetero Nacional junto con el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y la FTV. Diferencias históricas dentro de la izquierda

---

[36] La Voz del Interior, Córdoba, 21/2/2002, 1A

[37] Los Consejos Consultivos de Políticas Sociales municipales o provinciales son organismos compuestos por representantes de los trabajadores, los empresarios, las organizaciones sociales y confesionales y de los niveles de gobierno en cuestión. Las funciones asignadas han variado según la política de gobierno pero se mantienen aquellas vinculadas al control y propuesta de actividades y tareas para que los destinatarios de las políticas sociales realicen a modo de contraprestación (Franco, 2010).

impidieron que se lograra una expresión política de ese frente, y finalmente la ruptura con CTA se concretó en diciembre de ese mismo año (Natalucci, 2008).

El año 2002 fue también el de mayor cantidad de movilizaciones y acciones de protesta. Se trata de un período de fuerte crecimiento para el movimiento de trabajadores desocupados, que se organizó alrededor de la demanda y gestión de diversos planes sociales –de empleo, alimentarios, de emergencia-, a través de la participación en instancias formales como los Consejos Consultivos pero también en la protesta callejera sostenida a lo largo de los meses. El 23 de abril, Barrios de Pie se movilizó hasta la Legislatura donde entregó un petitorio reclamando planes de empleo y alimentos[38]. Un mes después realizó cortes en avenidas de acceso a Córdoba, demandando al gobierno por su intervención en la distribución de los planes para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. La disputa acerca de la administración de los planes entre los diferentes niveles del Estado y las organizaciones piqueteras fue ardua, y se extendió varios meses. A fines de ese año, distintas organizaciones de desocupados de Córdoba participaron en marchas y reclamos en el marco de un plan de movilización en todo el país. Barrios de Pie, junto a otros colectivos, se apostaron frente a la empresa láctea Sancor para demandar a sus directivos asistencia alimentaria[39], instalando nuevamente el reclamo de alimentos como acción pública que registraba a esas alturas fuertes antecedentes en la historia de la protesta territorial cordobesa. Unos días más tarde, se realizó la Marcha Federal con movilizaciones de las agrupaciones piqueteras en distintas provincias bajo la consigna "Que se vayan todos. Por otro 19 y 20". Frente al avance de la protesta principalmente en Buenos Aires, y en vísperas del primer aniversario de los estallidos de diciembre de 2001, el gobierno nacional dispuso fuertes medidas de seguridad para contener las movilizaciones.

El 20 de diciembre, la conmemoración de la caída del gobierno de De la Rúa encontró a las organizaciones divididas. Por un lado, Barrios de Pie y el Bloque Piquetero realizaron un acto en Plaza de la Intendencia, donde exigieron el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la Plaza de Mayo y en el interior del país un año antes, así como la renuncia del presidente Duhalde, el gobernador De la Sota y el intendente Kammerath. Por su lado, la Multisectorial -de la que participaban la CTA, junto a la Izquierda Unida y diversos gremios y asambleas vecinales- confluyó en Patio Olmos, donde se produjeron acciones contra edificios asociados con las políticas de los '90 en el imaginario del activismo: el propio Patio Olmos -una escuela técnica convertida en shopping durante el gobierno de Angeloz- y la sede de la UCR.

En los primeros meses del 2003, Barrios de Pie se movilizó en distintas ocasiones en el marco

---

[38] La Voz del Interior, Córdoba, 24/4/2002, 5A.

[39] La Voz del Interior, Córdoba, 4/12/2002, 3A.

de protestas coordinadas a nivel nacional, como las del 23 de enero y el 3 de febrero. En esta última se cortaron los accesos a distintos centros industriales en todo el país: en Córdoba las organizaciones se concentraron frente a la fábrica Volkswagen, exigiendo aumento de salarios, planes y subsidios para desocupados. En marzo, poco antes de las elecciones presidenciales, Barrios de Pie junto a otras organizaciones piqueteras realizaron fuertes movilizaciones en todo el país rechazando lo que denominaban la "farsa electoral"[40].

A lo largo de todo el año continuaron además las movilizaciones frente a las principales cadenas de supermercados en reclamo de asistencia alimentaria para las familias y los comedores gestionados por las organizaciones de desocupados[41]. La demanda de apoyo a la tarea realizada en los comedores se dirigía también al gobierno provincial, y tomó la forma de manifestaciones frente a las oficinas de distintas dependencias del Estado (Agencia Córdoba Solidaria, Gerencia de Empleo, entre otras). Ante lo que consideraban una respuesta insuficiente de las autoridades, el 4 de diciembre de 2003 Barrios de Pie realizó una toma de las oficinas de la Gerencia de Empleo en el centro de la ciudad en reclamo por el pago de 140 planes de empleo caídos el mes anterior y el pago del último mes adeudado.

Dos semanas después, el segundo aniversario del estallido de diciembre se conmemoró con manifestaciones en las calles céntricas. Nuevamente las protestas se dividieron en dos: la primera contó con la participación de Barrios de Pie, la CTA, el Sindicato de Luz y Fuerza y el Cispren, y culminó con un acto frente al edificio de Tribunales I en reclamo por el esclarecimiento del crimen de David Moreno, asesinado el 19 de diciembre de 2001. Por su parte, otro conjunto de agrupaciones piqueteras y partidos políticos de izquierda marcharon hasta la Plaza Velez Sarsfield. Esta etapa en la historia de Barrios de Pie se cerrará hacia el año 2004, momento en el que se abre una nueva temporalidad que Natalucci (2008) caracteriza como de "institucionalización del reclamo", y que supuso la articulación de las acciones del Movimiento con políticas públicas del Estado Nacional.

Como hemos venido señalando, este último tramo del período estuvo atravesado por una fuerte crisis económica, política y social que impactó de distintos modos a las organizaciones y a los espacios territoriales. Con las herramientas y experiencias construidas, las tres organizaciones debieron enfrentar una nueva coyuntura política a nivel provincial y nacional así como por el fortalecimiento de espacios de articulación que, en algunos casos, recuperaban parte de la experiencia de construcción barrial precedente. En un contexto de profundización

---

[40] La Voz del Interior, Córdoba, 12/3/2003, 3A.

[41] *"El Movimiento Barrios de Pie se movilizó",* La Voz del Interior, Córdoba, 11/3/2003, 3A; *"Piqueteros reclaman comida",* La Voz del Interior, Córdoba, 8/7/2003, 4A; *"Piqueteros pidieron planes y alimentos",* La Voz del Interior, Córdoba, 7/8/2003, 4A.

de la desocupación y la instalación de la identidad piquetera en el espacio público, algunas organizaciones reorientaron y otras fortalecieron sus estrategias y demandas en torno a la cuestión de la pobreza y la falta de trabajo, participando en los tres casos de espacios institucionales como los Consejos Consultivos de Políticas Sociales. Asimismo, la posibilidad de "dar un salto" por sobre aquel sistema político en crisis y que se denunciaba como agotado, permitió a los actores -con mayor claridad en los casos de Vecinos Autoconvocados y Barrios de Pie- elaborar y posicionar en el espacio público algunas alternativas que intentaron trascender los límites del trabajo territorial. Al mismo tiempo la UOBDS -la más antigua de las tres organizaciones- debió enfrentar un proceso de fractura y desarticulación.

A modo de cierre

La lectura del proceso organizativo de los tres **actores** a lo largo del período permite observar algunas variaciones en cuanto a los modos de significar e inscribir **demandas**, registrándose un desplazamiento desde el hábitat al trabajo y a la asignación de políticas asistenciales hacia fines de siglo XX y comienzos del XXI. Estas transformaciones, como adelantamos, ponen de manifiesto no sólo cambios en las demandas sino también en los **procesos organizativos** y en la diferente presencia de estos actores en el espacio público, en los distintos períodos analizados.

En el caso de la Unión de Organizaciones de Base, gestada a comienzos de los '90, el cierre de la experiencia de concertación con el Estado fue precedido de un período de confrontación intenso que no tuvo resultados significativos en relación a las demandas históricas de la organización. Posteriormente, la Unión debió enfrentar debates internos en relación a las alternativas que se abrían ante la coyuntura electoral y la consolidación de coordinadoras de desocupados y otros espacios de articulación a nivel nacional que ofrecían la posibilidad de trascender el ámbito local. A fin de siglo, las protestas de la UOBDS incorporaron a las cuestiones vinculadas al hábitat demandas por los planes de empleo distribuidos por el Estado. En ese contexto también, la UOBDS sufrió un proceso de ruptura y debilitamiento de su presencia en el espacio público y en los territorios en los que históricamente venía trabajando.

Por su parte, Vecinos Autoconvocados presentó algunas particularidades. Esta organización, que había nacido a mediados de los '90, continuó trabajando desde su identidad vecinal e independiente de los partidos políticos, con reclamos vinculados a la vivienda a lo largo de todo el período. Aunque no se integró a ninguno de los espacios nacionales de articulación de las organizaciones de desocupados, sostuvo su presencia como actor de demanda en el

espacio público, incluyendo progresivamente la cuestión de la desocupación en su agenda. Su crecimiento se asentó en la expansión y fortalecimiento del trabajo barrial, la administración de planes de empleo y el logro de algunas reivindicaciones demandadas al Estado.

Finalmente, en el contexto de profundización de la crisis política y económica se fortaleció el desarrollo de colectivos de desocupados que, como en el caso de Barrios de Pie ligado a la estructura de la Corriente Nacional Patria Libre, concentró sus demandas en torno al trabajo, la desocupación y gestión de planes asistenciales estatales. Asimismo, esta organización amplió su inserción en las comunidades, incorporando en este proceso experiencias territoriales locales previas y construyendo referencias y articulaciones a nivel nacional.

En segundo lugar, también se produjeron cambios en los **formatos** de protesta. El corte de calle o de ruta apareció tempranamente como modalidad que se sumó a las marchas y concentraciones; asimismo, hacia el final del período emergieron nuevos formatos como los cacerolazos, los saqueos o concentraciones frente a supermercados para pedir alimentos y la toma de edificios públicos. También formatos como el escrache a funcionarios y dirigentes políticos, aparecen reapropiados por algunos de los casos analizados. No obstante, un señalamiento de estas transformaciones que no atienda al significado otorgado a las acciones por parte de los propios actores pierde riqueza interpretativa. En este sentido, ni la toma de edificios públicos ni los cabildos – fundamentalmente impulsados por Autoconvocados – ni las grandes marchas – convocadas por la UOBDS y Barrios de Pie - tuvieron como único objeto la exigencia de una respuesta al gobierno; tampoco las concentraciones frente a los supermercados – principalmente realizadas por Córdoba desde Abajo – se proponían tan sólo la obtención de alimentos, ni los cortes de calle o ruta se organizaban exclusivamente en torno a la expectativa de conseguir planes sociales. En todos los casos también fue objeto de estas protestas la instalación pública de un problema, de una situación, que en ese momento era ignorada por los medios y la "opinión pública". Se ponían en juego en estas modalidades de protesta no sólo una intencionalidad política -la de mostrar-se en el espacio público reconociendo la lógica mediática que atraviesa la cultura contemporánea- sino una gran cantidad de aprendizajes organizativos vinculados a la defensa frente a la represión, la protección de los participantes, la coordinación entre distintos colectivos, entre otras.

Esta experiencia acumulada de protesta, de trabajo territorial y, en algunos casos, de gestión de planes y proyectos sociales, fue también la que se plasmó en los diferentes debates, dilemas y propuestas que atravesaron las organizaciones en el pre y post 2001.

Bibliografía

- Antonello, Judit (2004). *Consecuencias del saqueo en Argentina: la lucha piquetera.* Córdoba: Ferreyra Editor.
- Arriaga, Elisa, Franco, Ma. José y Medina, Leticia (2011). "Córdoba ante las reformas neoliberales. Apuntes para un estado de la cuestión" Ponencia presentada a las 2º Jornadas Nacionales de Historia de Córdoba. Córdoba: FFyH -UNC
- Caletti, Sergio. "Decir, autorrepresentación, sujeto". *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, Nº 17 (2006): pp. 19-78
- Carrizo, Cecilia. "Intervención estatal y organizaciones sociales. El Consejo Económico y Social de la Provincia de Córdoba. 1985-1993". *Administración y sociedad.* N° 10 (1997).
- Ciuffolini, Alejandra, comp. (2007) *En el llano todo quema: movimientos y luchas urbanas y campesinas en Córdoba de Hoy.* Córdoba: EDUCC.
- Danani, Claudia (2008). "América Latina luego del mito del progreso neoliberal: las políticas sociales y el problema de la desigualdad" Ciências Sociais Unisinos 44(1):39-48, Janeiro/abril 2008.
- Franco, Ma. José (2010): "Lo "comunitario" como modo de interpelación a los sectores populares. Una reflexión a partir de algunos programas sociales diseñados durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner". En Vidal, Gardenia y Boixados, Cristina (Coords). *Compilación "Estudios de la Historia de Córdoba en el s. XX" Tomo II.* (pp. 241-266). Córdoba: Ferreyra Editor.
- Garretón, Manuel. "La transformación de la acción colectiva en América Latina". *Revista de la CEPAL.* Nº 76 (2002).
- Gordillo, Mónica (2010). *¿Piquetes y cacerola? El argentinazo de 2001.* Bs. As.: Sudamericana.
- Gordillo, Mónica (2002). "La acción colectiva en Córdoba: actores, demandas y espacio público, 1992-1995". Ponencia de la *III Jornada de encuentro interdisciplinario y actualización teórico-metodológica: Las ciencias sociales en Córdoba*. Córdoba: UNC.
- Grassi, Estela (2003). *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal I.* Bs As: Espacio Editorial.
- Grüner, Eduardo (1990). "Política: ¿un discurso sin sujeto?". Ponencia en el Seminario *El nuevo significado de lo popular en América Latina*, Lima: DESCO [versión preliminar].
------- (1998). "*Una introducción alegórica a Jameson y Žižek*". En Jameson, Fredric y Slavoj Žižek: *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo.* Bs. As.: Paidós.
- Lechner, Robert (1981a) "Acerca del ordenamiento de la vida social por medio del Estado", *Revista Mexicana de Sociología,* Vol. 43, No. 3. (1981): pp. 1079-1102. Disponible en:

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/grassi/textos/Lechner.pdf
- Lechner, Robert (1981b). "Especificando la política". *Documento de Trabajo Programa FLACSO-Santiago de Chile.* Nº 134 (1981). Disponible en: http://www.pensamientocritico.info/articulos/otros-autores/144-especificando-la-politica*.html
- Melucci, Alberto (1994). "Qué hay de nuevo en los movimientos sociales". En Laraña Enrique y Gusfield Joseph. *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad.* Madrid: CIS.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Ed. Gorla.
- Medina, Leticia (2010). "Movimientos sociales, ONGs y Estado. La Unión de Organizaciones de Base, de la concertación a la desmovilización". En Vidal, Gardenia y Boixados, Cristina (Coords). *Compilación "Estudios de la Historia de Córdoba en el s. XX" Tomo II.* (pp. 241-266). Córdoba: Ferreyra Editor.
- Nardacchione, Gabriel; Rinesi, Eduardo; Vommaro, Gabriel (Eds) (2007). *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente.* Bs. As.: Prometeo.
- Natalucci, Ana (2008). "Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006". Tesis de Maestría en Cs. Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.
- *Revista Desafíos urbanos* (1995). Nº 7. Córdoba: Cecopal.
- SEHAS (1994) "La Mesa de Concertación Social", Art. 15, Córdoba, mimeo.
- Svampa, Maristella (2005). *La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo.* Bs. As: Tarcus.
-Schuster, Federico y otros (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina: 1989-2003. Documento de trabajo Nº 48, GEPSAC, Instituto Gino Germani, UBA.
- Scribano, Adrián (1998). "Los otros, nosotros y ellos: hacia una caracterización de las prácticas políticas en contextos de exclusión". En Molina, F.- Yuni, J. (coord.). *Reforma Educativa, cultura y política* (pp. 103-118) Bs.As.: FLACSO-Temas Grupo Editorial.